

## Caranavi: entre los disparos de la policía y la manipulación de un Informe



Gabriel Romano Burgoa

¿Usó la policía armamento letal en el desbloqueo en Caranavi? El reportaje que sigue a continuación presenta las razones por las cuales debe pensarse que fue así y por el contrario, no encuentra razones para librar de responsabilidad a la institución que debía cumplir un rol concreto, pero que carga en sus espaldas con dos fallecidos en circunstancias oscuras, la policía. También presenta las razones por las que un conflicto de relativa intensidad adquiere dimensiones mediáticas sobredimensionadas, relacionadas con la manipulación y el ocultamiento de la verdad.

---

Es la tarde del desbloqueo, eso refleja un video que fue captado en las jornadas de la intervención policial. Todavía continúa el movimiento de los efectivos. Todo luce lúgubre en aquellas imágenes, existe un espacio de doscientos metros entre los pobladores y la institución del orden que permanece en el acceso a Caranavi. Los oficiales están protegidos hasta los dientes con escudos sintéticos para resistir las pedradas, portan también los rifles lanza-gases, fácilmente confundibles con armamento letal. La calma es tensa mientras del otro lado, en una de las calles, está una ambulancia que se apresta a trasladar gente probablemente a La Paz.

La ambulancia no pudo partir. De inmediato sale una religiosa de la parte posterior del vehículo, que se detiene unos segundos a conversar con algunas personas que hacen de mirones y voluntarios, ellos le piden ir a hablar con la policía. Cerca, un grupo todavía enfurecido por la utilización desmesurada de agentes químicos. El pueblo entero huele a gas, mientras se evidencia que muchos animales murieron durante el enfrentamiento por asfixia.

La monja católica hace lo impensable, emprende serena caminata en dirección a la policía cuando todo es incertidumbre. Son trescientos metros, tres cuadras. Pero a ella no le importa el peligro porque hay que atender a los heridos y comienza a caminar. Algunos la acompañan y le advierten del peligro que corre mientras van quedando poco a poco en medio camino, el miedo es abrumador, lleva en sus manos un palo con un trapo blanco manifestando intenciones pacíficas. Cuando no hay nadie más aparece de la nada un hombre que se suma a la caminata, es el párroco del pueblo, Hernán Barroz, mediano de

estatura, relativamente joven que la escolta en una caminata que puede ser un error, mientras los gritos de advertencia quedan muy lejos.

Del otro lado, uno de los jefes policiales, coronel de policía de apellido Tórres, sale al encuentro. Ambos llegan a una esquina donde claramente se puede advertir que existe de un lado un contingente de policías y del otro comunarios enardecidos. El encuentro es tenso pero respetuoso. La monja pide que paren de reprimir, que fue suficiente, pues es necesario que detengan el avance hacia la población. Había rabia contenida.

– Ya cumplieron con su objetivo, qué más quieren, ustedes también son pueblo. Ya hay bastantes heridos, ya la gente no quiere seguir luchando, pero lo que no quieren que se tome la federación, ni se tomen el pueblo, porque ellos también han luchado...están utilizando balas, tengo ya una bala que han utilizado ustedes (la policía), yo tengo la prueba, dijo. Mientras el coronel intenta negar la afirmación.

### **Caranavi 7 y 8 de mayo, antecedentes**

La manzana de la discordia en el conflicto de Caranavi fue instalación de una planta procesadora de cítricos, donación del gobierno Venezolano el año 2008 para su funcionamiento en la provincia Caranavi. El anuncio del acontecimiento realizó el Presidente Evo Morales el 4 de abril de este año, mismo día de las elecciones de gobernadores y alcaldes. Dos meses antes el 5 de marzo, un ampliado de la Federación de colonizadores de La Paz determinó que la planta de cítricos debía instalarse en la Colonia Manchego de la Central Boncini, Palos Blancos.

El problema se agudizó en torno a los términos que definían la instauración de la planta, si debía ser en la zona de Alto Beni o en la ciudad de Caranavi. Esta razón marca una disputa a nivel político entre Federaciones de Colonizadores, las mayoritarias presididas por el hermano del senador Fidel Surco, Luís Surco, que mantuvieron una postura favorable a sus intereses y la Federación de Caranavi que pedía la instalación de la planta en su ciudad.

No fue un problema sectorial tal como sostuvo el gobierno mediante sus principales autoridades. No fue simplemente un asunto en el que las federaciones debían atender “conflictos internos”. En medio se encontraban autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional y familiares suyos con intereses claramente definidos, por tanto era un problema político de mayores dimensiones. La percepción de Caranavi fue esa, de inmediato procedieron a instalar un bloqueo de caminos para demandar la intervención del estado ante la inminente instalación de la planta en Alto Beni. La medida de presión concreta: el bloqueo.

Las demandas fueron subiendo de tono en medida que pasaban los días y el gobierno se negaba intervenir. Los Colonizadores de Caranavi, no se contentaron con pedir la planta de cítricos, si no exigieron la renuncia del

senador Surco y del diputado Quispe por haber sido los causantes de la prolongación del conflicto. Mientras el bloqueo era una constante, las palabras del senador Surco se dirigieron a descartar una posible renuncia suya tras las demandas los colonizadores: *“el ministro de gobierno ha encomendado hacer un cuarto intermedio, sobre el tema del bloqueo e instalar las negociaciones con el presidente, son muchos días, la gente esta en zozobra y en preocupación, ellos tienen que venir a la paz, yo no voy a renunciar, soy orgánico y seguiré trabajando sea lo que sea”*, fueron sus palabras el 4 de mayo, tres días antes del desbloqueo.

Entretanto el gobierno, reiteradas veces, acusó al sector del conflicto de estar canalizando intereses político-partidarios. Apuntó a agrupaciones y partidos que habían ganado una importante cuota de representación en las elecciones del 4 de abril. En pleno auge del divorcio entre Evo Morales y Juan del Granado se acusó al MSM, UN y al MSP de Lino Villca por ser los causantes del problema. Se trataba de uno de los juegos retóricos que tomó el gobierno para minimizar la situación, estrategia que también fue implementada en situaciones como Uncía y las movilizaciones de Potosí en el mes de agosto, que finalmente terminaron enfureciendo a los pobladores de Caranavi pese a las posteriores invitaciones de diálogo que propuso el Órgano Ejecutivo. Fue un proceso discursivo que varió conforme pasaba el tiempo.

El 6 de mayo, a diez días de iniciado en bloqueo y con al menos una docena de puntos de obstaculización en la ruta, Caranavi se declaró en emergencia. Por otro lado, se habían instalado piquetes de huelga, se tomó la Alcaldía de Caranavi y quedaba en pie la amenaza de cortar el suministro eléctrico del departamento. La tensión aumentó cuando los mineros cooperativistas de Guanay anunciaron que procederían a desbloquear la ruta si el Gobierno no tomaba acciones efectivas.

### **Desbloqueo e interpretaciones del gobierno**

El punto de inflexión se dio horas antes del 7 de mayo, momento en que el Ministerio de Gobierno decide intervenir la ruta y manda contingentes policiales al lugar. *“Por instrucciones del gobierno del estado se ha instruido a la Policía Nacional a movilizarse en un contingente numeroso para proceder al desbloqueo en la localidad de Caranavi. Un primer contingente de 700 policías procedió al desbloqueo”* fueron las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera ese mismo día. Sin embargo, horas después, cuando se disponía a salir un nuevo grupo de apoyo a Caranavi, algunos medios de comunicación lograron captar lo que a la postre sería esencial: policías llevando municiones y armamento letal. Esto sucede en puertas de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales UTOP, en la calle Junín de la sede de gobierno cerca de las 10 de la mañana del día 6. Luego el desenlace sería conocido, pues mueren dos jóvenes civiles y al menos una decena de policías resultan heridos, la mitad con impactos de bala entre los

cuales se encontraba el ex Comandante departamental de La Paz, Cnel. Ciro Farfán.



Residuos del material utilizado por la Policía en el desbloqueo.

El 7 y 8 de mayo, mientras los enfrentamiento entre civiles y policías se mantenían, el Ministro de Gobierno Sacha Llorenti efectuó dos ruedas de prensa junto a las autoridades del Alto Mando Policial. En la primera, erróneamente, negó la existencia de fallecidos y en la segunda señaló que todo el problema desatado en la región se debía a la

existencia de un “grupo político armado”. Tesis que sólo él se atrevió a sostener. Es sin duda, la primera interpretación.

La segunda interpretación, ya la habíamos adelantado, fue dirigida a culpabilizar de todo el desbande social de Caranavi a razones políticas y los vínculos de los dirigentes con partidos contrarios al MAS. Esto evidentemente no demostró ningún tipo de responsabilidad, pues no es un delito tipificado ser militante de uno u otro partido político. Las acusaciones más fuertes se efectuaron contra el dirigente Luis Achu Chambilla a quien se relacionó con anteriores gobiernos, militante del MIR en 1995, en 1997 seguidor de Samuel Doria e instruido por USAID según la declaración de los ministros de estado.

Las consecuencias de esto fueron notorias. El gobierno instruyó a la fiscalía iniciar un proceso de investigación inmediato con pocos resultados. El ministro Sacha Llorenti en un informe brindado a la Cámara de Senadores ofreció los siguientes números: 54 personas fueron detenidas, 15 de ellas fueron remitidas a la cárcel como detenidos preventivos, 21 personas fueron imputadas, 16 fueron puestas en libertad y 6 se beneficiaron con medidas sustitutivas. Casualmente el número de detenidos preventivos descendió una vez consolidado el acuerdo con el gobierno. El 11 de mayo se efectuó una reunión entre representantes del sector en conflicto con el presidente Evo Morales en la Vicepresidencia del Estado se acordó la construcción de dos plantas procesadoras una en Caranavi y otra en Alto Beni, no se aceptó la demanda planteada por los sectores de Caranavi para cambiar al Ministro de Gobierno, pero, poco a poco, los detenidos fueron recuperando su libertad.

Ese mismo día emanó una disposición de la Cámara de Diputados que determinó la investigación de estos hechos mediante una comisión integrada de Derechos Humanos y de Gobierno cuyos presidentes forman parte del

oficialismo, la diputada Marianela Paco de Sucre y el diputado Lucio Marca de La Paz.

Constituida la Comisión se elaboró un cronograma de actividades entre las cuales figuran entrevistas en el lugar de los hechos y la comparecencia de las principales autoridades de estado para explicar la razón del desbloqueo. Sin embargo, algo contradictorio sucedió el día en que el Ministro de Gobierno Sacha Lorenti y el entonces Viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico, se presentaron a declarar ante la instancia legislativa. La contradicción giró en torno a la existencia de civiles armados en la zona: *“hay dos personas muertas, hay policías heridos de bala, hay imágenes registradas por sus propios colegas de gente con armas largas y armas cortas, por supuesto que ha habido una acción armada, por supuesto, hay personas muertas, personas heridas”*, dijo el Ministro de Gobierno. En cambio, ese día, el viceministro Torrico dijo lo siguiente: *“no creo, honestamente. No existe un tercer grupo armado y menos que exista grupos armados regulares en la provincia de Caranavi. Lo que sí es que del mismo grupo, algunos ultristas, el hecho de la presencia policial podría haber desencadenado que algunas personas utilicen armas de fuego”*.

### **¿Qué pasó con los muertos y los heridos?**

La respuesta después de cuatro meses debiera ser respondida por la comisión integrada presidida por el MAS en su informe, pero en el contenido del mismo no figura ni la más mínima alusión del uso de armamento letal por parte de la policía, menos una hipótesis que dé señal de las muertes. Llama también la atención el desdén en que se trató los casos de los policías heridos. Se responsabiliza a los comunarios de promover el conflicto y a los medios de comunicación de la zona por ser agentes de “instigación”. Por si fuera poco, de manera insistente, se hace una demostración de los intentos de diálogo que el gobierno pretendió entablar, una especie de apología de las instituciones de estado. En el informe los ministros que estuvieron encargados de la negociación y el operativo policial quedaron absolutamente exculpados.

Existe una preocupante omisión si no un acto premeditado de sesgar alguna información que fue proporcionada a la comisión. Para prueba de ello comparamos el informe con un video captado por la misma instancia investigadora de diputados donde se relata la forma en que fueron asesinados Fidel Hernani y David Calisaya, aspectos que son dejados de lado en la redacción del documento oficial. El reporte de la comisión otorga un espacio amplio de sus páginas a explicar las funciones de los ministerios que trataron el problema, parece un ensayo sobre las consecuencias económicas del conflicto, pero no sirve de mucho para dilucidar lo que pasó. Hace referencia a una investigación para determinar cómo se hirieron a los policías, proceso iniciado por el Ministerio de Gobierno, pero no dice nada de la querrela contra las autoridades de estado presentada por los familiares de los asesinados.

Tampoco reflejan la contundencia de los testimonios que responsabilizan a la policía.

Aparecen dos aspectos que llaman la atención en los testimonios de reconstrucción en el video aludido. En el caso de Fidel Hernani existe un testigo, Richard Ucumani Chambi, que aseguró estar a su lado y ver cómo se produjo el disparo que acabó con su vida, relata que en pleno enfrentamiento advirtió cómo Fidel fue alcanzado por una bala, él como acción instintiva decidió socorrerlo girando el cuerpo y retrocediendo porque frente suyo estaba la policía, en el intento sintió el roce de un proyectil en el codo que según su versión vino del lado de la policía, estuvo a punto de morir, relata, mientras Fidel quedó en el piso herido. Entonces como acción de conservación inmediata decidió lanzarse a un costado del camino, a los matorrales.

En el caso de David Calisaya se concluye que su deceso se efectuó en una de las calles de Caranavi.

David, increpando a un grupo de policías comenzó a reclamarles mostrando las vainas de los proyectiles en su mano. Cuenta otro testimonio que un policía “de porte alto” se le acercó armado mientras los compañeros de David se hicieron a un lado, David quedó cara a



Intestinos humanos mostrados por un comunario de Caranavi.

cara recriminando al efectivo quien, sin vacilar, apuntó su arma y le disparó. Los resultados preliminares de la prueba balística efectuada el mes de agosto dan cuenta de al menos 7 disparos en el pecho. El testigo no identificado en el video, después de su relato, vierte toda su ira contra el MAS “*puede hacer lo que quiera con el poder que tiene, pero que para Dios las muertes contarán*” son sus palabras.

El tema de las muertes no parecen ser importantes en la redacción final del informe del MAS, responsabilidad de la diputada Marianela Paco y el diputado Lucio Marka. Vale preguntarnos por qué no son tomados en cuenta aspectos como estos que son fundamentales. El informe tampoco señala nada relacionado con la supuesta responsabilidad de Fidel Surco y David Quispe, pese que reiteradamente los pobladores, en el video, aseguran que son los mayores responsables del conflicto. Tampoco parece ser importante para los miembros de la comisión integrada de Derechos Humanos y Gobierno de la Cámara de Diputados el hecho mismo de que los afectados hayan asegurado

haber sido fieles al **Instrumento Político** y hablar con decepción de la forma en que les paga el gobierno ¿No habría sido un elemento suficiente como para sospechar que en medio del conflicto estaban cuestiones de poder e intereses personales?

Se trata de un informe que deja dudas sobre los procedimientos utilizados en un caso que aparenta ser pequeño en cuanto al costo de vidas pero grande en cuanto a la manipulación política. En cuanto al video, se trata del documento que evidencia los instrumentos utilizados para el desbloqueo casquillos, residuos de material que corresponde a los gases y otros elementos que no fueron identificados técnicamente. Existe un testigo, se ve en el video de la comisión, que dice haber recolectado los indicios de la brutalidad policial. Él invita a pasar a la comisión investigadora y muestra sobre una mesa rústica todo lo que pudo recolectar como indicio, textualmente, dice tener casquillos de armas de fuego guardados. El video se interrumpe, pero lo más sobresaliente es que se reanuda con un reclamo hacia la Diputada Paco, se la regaña por llevarse todas las pruebas metiéndolas en una bolsa plástica con total dejadez, sin inventariar cada indicio. Los reclamos son inmediatos, ella asegura que es parte del primer poder del estado, que todo lo que ella y la comisión hagan deberá ser tomado por el ministerio público, pero la diputada y quienes la acompañan no verifican, no anotan indicios, no los registran y por último no aparecen en el informe final ¿Por qué?

Ahora bien, no quiera pensarse que la solución final de todo la tiene la oposición. Si bien existió un informe por minoría perteneciente a la bancada de Convergencia Nacional y Unidad Nacional que en su breve extensión difícilmente puede representar el correlato de lo sucedido. Tiene sus vicios: procedimentalmente no está bien, posee una redacción atropellada y fundamentado en un puñado de declaraciones poco precisadas.

Sin embargo, después de todas estas contradicciones, la gota que derramó el vaso fue el informe que presentaron la Asamblea Permanente de Derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, críticos en alto grado al actuar del gobierno en el conflicto mismo. En el caso particular del segundo informe la respuesta del ejecutivo fue evidente en una conferencia de prensa de varios ministros. *“Es un informe parcial, es un informe incompleto, no es objetivo toma algunos testimonios de algunas personas, no toma en cuenta a todos los actores y consideramos que una institución como el Defensor del Pueblo tiene que decir la verdad”*, fueron las palabras del Canciller David Choquehuanca. Mientras que el ministro Sacha Llorenti repitió hasta el cansancio que la Policía jamás usó armamento letal: *“la instrucción firmada por el Oscar Farfán comandante departamental de la policía de La Paz, se recomienda al personal policial que en cumplimiento a disposiciones superiores esta terminantemente prohibido el uso de armas de fuego”*.

El informe del Defensor del Pueblo puso bajo sospecha la acción policial, consideró inoportuna la intervención de la institución del orden señalando que se hizo un uso desmedido de la fuerza y que de protector de los derechos de las personas pasó a ser un agresor: *“se ha podido evidenciar acciones de la Policía que vulneraron la dignidad de las personas, dentro las que se distinguen: aprehensiones indiscriminadas, el uso excesivo y desproporcional de la fuerza, intimidaciones y amenazas, trato inhumano y degradante a los detenidos, ingreso arbitrario a domicilios sin autorización del propietario en forma violenta y uso excesivo de gases lacrimógenos”* menciona en la parte final correspondiente a las conclusiones y recomendaciones. Además fue el informe que de forma categórica pone en tela de juicio la sonada tesis gubernamental que en Caranavi ningún policía llevó armamento reglamento reglamentario, ni letal. A continuación se presenta un cuadro que ilustra las características más relevantes de los informes existentes sobre el caso.

ACTOR/INFORME	INFORME POR MAYORIA (MAS)	INFORME MINORIA (OPOSICION)	INFORME DEFENSOR DEL PUEBLO Y DDHH
CAUSAS DEL CONFLICTO	Ausencia de un acuerdo para la instalación de la planta procesadora de cítricos. Se responsabiliza a los dirigentes de la Federación Agraria de Colonizadores de Caranavi de promover el conflicto por razones e intereses personales.	Supuesta pugna de poder entre dirigentes de la provincia de Caranavi. El senador Fidel Surco y el diputado David Quispe serian los responsables directos del conflicto.	Falta de un acuerdo para determinar la instalación de la planta procesadora de cítricos y lentitud del gobierno para buscar una salida dialogada del conflicto.
GOBIERNO	Sostiene que el gobierno hizo todos los esfuerzos necesarios para articular el diálogo mediante el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales.	Denuncia negligencia por no actuar oportunamente.	Existe omisión por no atender el conflicto oportunamente
ACCION POLICIAL	Es entendida como una acción constitucional dirigida a evitar un enfrentamiento entre bloqueadores y bloqueados. Niega la utilización de armas de fuego de parte de la Policía. Hace énfasis en las bajas policiales como producto de heridas de bala	Presume la utilización de armas letales por parte de la policía. Establece una acción que fue contraria a la integridad corporal de los comunarios, hubo un trato inhumano a menores de edad y mujeres, atento contra la libertad de expresión y allanamientos ilegales.	Sospecha de uso de armamento letal. Hace énfasis en el uso desproporcional de la fuerza, excesivo uso de gases lacrimógenos, acciones de progresiva violencia. Pasa de ser defensora a agresora de los derechos de los comunarios. Describe allanamientos ilegales en domicilios de gente que no tenía parte en el conflicto.
SOBRE UNA ACCIÓN ARMADA DE LOS	Admite actos de destrucción de la propiedad pública y	No hace mención de este aspecto.	Se admite que varios efectivos fueron afectados en su

COMUNARIOS	privada, como la quema de las instalaciones de la Escuela Policial Básica de Caranavi. Menciona una organización militar de los comunarios para llevar a cabo una tarea permanente en el bloqueo		integridad por mantener el orden público.
SOBRE LAS MUERTES	Pide al Ministerio Público indagar sobre las muertes de dos jóvenes.	Pide al Ministerio Público indagar sobre las muertes de dos jóvenes.	Pide al Ministerio Público indagar sobre las muertes de dos jóvenes.
PRESUNTOS RESPONSABLES	Se responsabiliza a los sectores de Caranavi de incitar a la confrontación. Quedan bajo sospecha un grupo de medios de comunicación que habrían tomado una postura activa a favor del conflicto direccionando las acciones de los comunarios contra la Policía.	Son responsables de la generación del conflicto: Luís Surco, Fidel Surco, David Quispe y Marco Montellano. Cometen negligencia e incumplimiento de deberes: Sacha Llorenti (Ministro de Gobierno), Oscar Coca (Ministro de la Presidencia) y Oscar Nina Comandante de la Policía.	Halla responsabilidad en la acción policial cuya intervención produjo policontusiones en los ciudadanos, diversas heridas de proyectil de arma de fuego. El gobierno cayó en la omisión y vulneró el derecho al libre tránsito de los ciudadanos bloqueados. La Policía puso en situación de riesgo a sus propios efectivos.

Por otro lado, existe otro elemento que es importante mencionar, relacionado al itinerario discursivo que sostuvo el gobierno antes, durante y después del desbloqueo de Caranavi. Se trata de argumentos que tienen algunas particularidades, el primero relacionado a una probable intención de responsabilizar las razones del conflicto a agentes ajenos al MAS (la derecha y el gobierno norteamericano) cuando en una primera instancia el gobierno se negó a intervenir, por considerar la pugna por la planta de cítricos algo que concernía exclusivamente a las federaciones del lugar. Un segundo argumento que pretende negar a rajatabla cualquier indicio de responsabilidad de la policía en las muertes de Fidel y David, desoyendo las versiones de los testigos a extremo de afirmar que no fueron policías, si no infiltrados los que dispararon. Tampoco hay que dejar de lado la hipótesis de una de las cabeza del Ministerio de Gobierno, Sacha Llorente, sobre el presunto “grupo político armado” afincado en la zona.

Estos tres elementos pese a ser mencionados por instancias del Órgano Ejecutivo de gobierno, no llegan a ser confirmados por la comisión que oficialmente se dedicó a indagar sobre los móviles de la violencia en Caranavi. Es decir se evidencia falta de correlación entre lo mencionado en esferas gubernamentales y lo sostenido en el informe oficial de comisión parlamentaria. Para muestra de ellos el siguiente cuadro.

EVOLUCIÓN DEL DISCURSO DEL GOBIERNO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL CONFLICTO DE CARANAVI				
ANTES DEL BLOQUEO	DURANTE EL BLOQUEO	EN EL DESBLOQUEO	DESPUÉS DEL CONFLICTO	DURANTE LAS INVESTIGACIONES
El Presidente y sus ministros aseguran que se trata de un tema interno que concierne exclusivamente a las federaciones de colonizadores de la provincia Caranavi. Se niega el desbloqueo del camino.	Se responsabiliza a partidos de oposición de haber promovido el conflicto, entre ellos miembros del MPS, MSM y ex militantes del MIR.	El Ministro de Gobierno niega la existencia de dos personas fallecidas como producto de armas de fuego, solamente se brinda un informe de los policías que resultaron heridos.	Se hace referencia a un <i>grupo político armado</i> que actúa en la zona. Se implica al gobierno norteamericano y a la agencia USAID.	El gobierno reconoce que existieron agentes infiltrados dentro la Policía que posiblemente dispararon contra civiles. Se descalifican los informes de la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos.

\*\*\*\*\*

De todo lo expuesto llama la atención que un problema de estas características haya sido activado por razones carentemente políticas, relacionadas con los liderazgos sectoriales de Fidel Surco y David Quispe. El proceso de investigación de todos los informes se dedicó a establecer lo sucedido en el desbloqueo cuyo correlato fueron las dos muertes y nada más. Aparentemente el conflicto fue más que eso, pues dejó una huella profunda en la población de Caranavi al extremo que los negocios de Fidel Surco no funcionan en la capital de provincia, la empresa Trans Total no va a Caranavi.

En lo que concierne estrictamente a las muertes, llama la atención que los informes balísticos sean tan coincidentes con los relatos de testigo y lo más complicado el hecho mismo que la comisión de diputados perteneciente al MAS no haya reflejado lo sucedido poseyendo ese material investigativo. A esto se suma la estructura y redacción del informe oficial que inculpa a los pobladores y no habla de la labor policial.

Menos existe un reflejo del desencanto que manifiestan los pobladores contra el MAS y la forma de llevar a cabo el desbloqueo. En la reconstrucción de los hechos los comunarios fueron sumamente duros con Fidel Surco, David Quispe y el gobierno Nacional al grado de desnudar un conflicto de intereses que prácticamente desnuda la decepción política de los pobladores de Caranavi.

Empero, quedan cosas que deben continuar la ruta investigativa, por ejemplo la coincidencia entre los nombres de los fallecidos con las autoridades que estaban

siendo cuestionadas. ¿Por qué la dureza de Caranavi con el MAS después del desbloqueo? ¿Qué rol cumplió Fidel Surco a punto de amenazarlo con revertir sus propiedades a favor de la comunidad? ¿Por qué Caranavi sigue siendo fuente de conflicto a meses de lo sucedido? A modo de apunte, César Navarro viceministro de coordinación con los movimientos sociales aseveró el 14 de agosto que la embajada norteamericana se habría encontrado detrás de los enfrentamientos de Caranavi tal como, supuestamente, sucedió con Uncía y los últimos conflictos en el departamento de Potosí.

Actitudes como estas restan credibilidad al trabajo de los disputados masistas en las investigaciones, en el caso de ser cierto ¿cómo es que no investigaron algo semejante? ¿Cómo un viceministro puede tener más información que la misma comisión de diputados? ¿Por qué la policía no vuelve al lugar? A qué se debe que el informe por mayoría no dé cuenta de la contradicción entre el Ministro de Gobierno Sacha Llorenti y su ex viceministro Gustavo Torrico en relación a la existencia de un grupo político armado, el primero lo aseguró, el segundo lo descartó en declaraciones ante la misma comisión. A esto se suma la intención de crear una federación paralela en julio donde resulta herido Luís Surco, hermano del senador del MAS. La consecuencia semanas más tarde fue el cambio de dirección en la Federación de Colonizadores que ahora se encuentra en poder de Gustavo Aliaga perteneciente a Caranavi y sumamente crítico a los Surco.